

Auto No: AS-079
Proceso: Acción Popular
Radicado: 05308 31 03 001 2021 00137 01
Accionante: Mario Restrepo
Accionado: Koba Colombia y Otros
Asunto: Niega solicitudes

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA UNITARIA DE DECISION CIVIL**

Medellín, diecinueve (19) de julio del dos mil veintidós (2022)

Durante el término de ejecutoria de la decisión adoptada el 15 de julio del 2022, el actor popular presentó memorial solicitando *“que se resuelva la apelación así sea extemporánea”* y el accionado por su parte pretende que: *“ordene al actor popular cumplir con sus deberes procesales conforme con el artículo 3 de la Ley 2213 de 2022 e imponer la respectiva multa por su incumplimiento”*.

Bien, frente a la parte accionante bastará indicar que los términos para la realización de las actuaciones procesales a cargo de las partes son de obligatorio cumplimiento (artículo 117 del C.G.P) por lo tanto, las peticiones que se realicen fuera de éstos tendrán las consecuencias que las normas establezcan a su cargo, en este caso, el rechazo del recurso de apelación por haberse presentado extemporáneamente. De allí que la mora que pueda presentarse por parte del juez en la resolución de los procesos, en ningún momento constituye una excusa que el accionante pueda establecer a su favor para abstenerse de cumplir con los deberes procesales que le asisten.

De otro lado, frente a la sanción que clama el apoderado de la sociedad demandada, es necesario advertir que su decreto no se impone llanamente, sino que, por el contrario, debe consultarse la transcendencia de la comunicación, especialmente, si puede afectar a la parte procesal contraria, piénsese por ejemplo, en los casos de cumplimiento de términos procesales o en solicitudes que pueden afligir propiamente el objeto de la Litis, circunstancias que por su grado de importancia, resulta relevante el conocimiento previo de su contraparte.

Sobre el tema, la Corte Constitucional en sentencia C-420 del 2020 al realizar el juicio de necesidad del Decreto 806 del 2020, hoy ley 1123 del 2022, indicó que:

***Necesidad fáctica.** El artículo 3º cumple con el juicio de necesidad fáctica en tanto el establecimiento de deberes procesales para los sujetos procesales y las autoridades judiciales es una medida idónea para alcanzar las finalidades generales del Decreto. Esta medida contribuye efectivamente a lograr “la implementación adecuada de la virtualidad en la justicia y promueve que todos los sujetos interesados se formen en las tecnologías de la información”^[241]. En efecto, los deberes consistentes en (i) realizar las actuaciones y “asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos”; (ii) informar los canales digitales elegidos para los fines del proceso o trámite y (iii) enviar por medio de ellos un ejemplar de todos los “memoriales o actuaciones” que se realicen, facilitan el trámite virtual de las notificaciones, las audiencias y el envío de comunicaciones, oficios, despachos y traslados.*

***Necesidad jurídica.** El artículo 3º es jurídicamente necesario porque su contenido sustantivo no es idéntico al del artículo 78 del CGP. En efecto, el art. 78 del CGP (i) no impone el deber de asistir a las audiencias y diligencias mediante medios tecnológicos; **(ii) no obliga a los sujetos a enviar copia de todas sus actuaciones, solo de algunos memoriales;** y (iii) concede 1 día para enviar el documento, mientras que el artículo 3º sub examine obliga la remisión del memorial o la actuación de forma simultánea al envío a la autoridad judicial. En cualquier caso, la reproducción de una parte del artículo 78 del CGP en el Decreto sub examine no es arbitraria ni irrazonable y, por tanto, no desconoce la exigencia de necesidad. Por el contrario, contribuye a alcanzar sistematicidad y coherencia en la implementación de las TIC. Subrayas ajenas al texto.*

En el caso sub judice, no hay lugar a imponer la respectiva sanción, dado que la actitud del accionante no evidencia un interés soterrado de faltar a la verdad procesal y obrar de mala fe para con su parte opuesta, aunado a que el propósito del legislador frente a dicha sanción, no es más que propender por la publicidad de las actuaciones y la transparencia durante el trámite procesal, las que en la presente acción constitucional se subyacen al incorporar al expediente digital, los memoriales que presenten las partes, que estarán a su disposición a través del link de acceso, garantizándose, en consecuencia, la publicidad y el debido proceso, como en efecto ocurrió, pues la comunicación del memorial se conoció por la parte accionada de manera oportuna al haber sido ingresado e incorporado al expediente, lo que implica que en ningún momento pudo transgredirse derecho alguno a las partes.

Adicionalmente, no puede desconocerse la naturaleza de la presente acción constitucional, en la que el cumplimiento de las formalidades propias del

proceso es más flexible y tiene fines altruistas propias de los derechos colectivos, objeto de discusión.

No obstante, sin perjuicio de lo anterior, se insta a las partes para que acaten en su integridad las normas procesales vigentes y en particular a dar cumplimiento a los deberes que tienen frente al proceso, con el fin de evitar futuras irregularidades y dilaciones del proceso.

En mérito de lo expuesto, la Sala Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín

RESUELVE

PRIMERO: Declarar improcedente la solicitud de la parte accionante, conforme a las razones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: Negar la solicitud de imponer sanción a la parte actora por la omisión en el envío del memorial del 22 de junio por las razones expuestas.

TERCERO: Por Secretaría continúese el trámite pertinente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
Magistrado